

San Fernando, nueve de marzo de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS INTERVINIENTES. Ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, constituido por el Juez Presidente de Sala, Felipe Cortés Ibacache, el magistrado Rafael Escalante Ortega y la magistrada Marisol López Machuca, se llevó a cabo los días 28 de febrero y 1 de marzo del año en curso la audiencia de Juicio Oral en la causa Rol Interno del Tribunal **133-2018**, seguida en contra de la acusada **Isamar Del Carmen Lermenda Rocha**, chilena, 29 años, nacida el 27 de noviembre de 1992, cédula nacional de identidad N° 18.070.541-4, quien declaró ser comerciante, soltera, y tener domicilio en calle Luis Durán s/n, villa Estación, comuna de Arauco.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representada por la Fiscal de San Fernando, **Edith Orellana Vera**; en tanto, que la defensa de la acusada estuvo a cargo del Defensor Penal Privado, **Ernesto Ochoa Cid**, ambos con domicilio y forma de notificación ya registrados en la carpeta virtual del SIAGJ de esta causa.

A causa de la pandemia por Covid-19 la audiencia se desarrolló de manera semipresencial, utilizando para ello la plataforma zoom.com, sin que existieran reparos al respecto.

SEGUNDO: ACUSACIÓN Y ARGUMENTACIONES DE LA FISCALÍA. La acusación materia de este juicio, según se expresó en el auto de apertura, fue la siguiente:

Hecho 1.

“En el mes de abril de 2016, la víctima Felipe Alejandro Valderrama González, publicó en la página virtual Chileautos.cl la venta de su Station Wagon marca Kia Motors, Modelo Sportage Pro II, 4x4, placa patente CHCK-63. El día 18 de abril del mismo año, fue contactado telefónicamente por un sujeto que se identificó como Walterio Leyton, quien manifestó su deseo de comprar el vehículo para su hija, señalando no poder concurrir a la ciudad de San Fernando, lugar donde se ofertaba el móvil, pero que lo haría su hija en compañía de un mecánico. En efecto, el día 19 de abril, alrededor de las 15 horas, la víctima se reunió en el sector céntrico de San Fernando con la acusada, quien señaló llamarse Francisca Leyton y ser hija de Walterio Leyton, la que era acompañada por un sujeto varón, supuesto mecánico. Tras revisar el vehículo, la acusada manifestó satisfacción con éste y que le pediría a su padre que procediera a comprarlo. Ese mismo día, en horas de la noche, la víctima recibió llamado telefónico del supuesto padre de la acusada, quien señaló que su hija concurriría a esta ciudad a concretar la compra del móvil. Fue así que el día 20 de abril de

2016, alrededor del mediodía, la víctima se reunió con la acusada en una Notaría de San Fernando. En esta oportunidad, la acusada se hacía acompañar del mismo sujeto del día anterior y de una mujer de nombre María del Pilar Acevedo Vásquez, a quien presentó como su tía. En ese acto se concretó la venta del vehículo, para lo cual la víctima le otorgó un poder especial, para que en su nombre pudiera transferir el vehículo a un tercero. El precio de la compraventa fue de \$7.400.000.-, el cual la acusada simuló pagar mediante depósito del cheque Serie AY 5876221, de la cuenta corriente N° 62900073106 del Banco Estado de Chile, en la cuenta del afectado N° 41441044, del BCI; depósito que en el mismo acto habría efectuado a distancia el supuesto padre de la acusada. La víctima revisó su cuenta bancaria por internet y al verificar que figuraba un saldo contable por el valor de la compraventa, hizo entrega material del vehículo a la acusada y sus acompañantes, quienes se lo llevaron de inmediato. Sin embargo, al día siguiente, el banco no liberó los fondos y procedió a protestar el cheque depositado por el supuesto padre de la acusada, toda vez que éste no tenía fondos, la cuenta corriente respectiva, se encontraba cerrada desde el año 2013 y además la firma era visiblemente disconforme". (sic)

Hecho 2.

"En el mes de abril de 2016, don Héctor Hugo Orellana Vergara, publicó en la página virtual Chileautos.cl la venta de su automóvil, marca Peugeot, Modelo 207. El día 18 de abril del mismo año, fue contactado telefónicamente por un sujeto que se identificó como Walterio Leyton, quien manifestó su interés en la compra del vehículo, acordando concurrir al día siguiente en horas de la mañana, a la ciudad de San Fernando, lugar donde se ofertaba el móvil, para examinar el vehículo. Esta persona no concurrió a la hora señalada, pero en horas de la tarde del mismo día 19 de abril, la víctima recibió un llamado telefónico por parte de la acusada, quien se presentó como Francisca Leyton e hija de Walterio Leyton, manifestando su deseo de ver el automóvil en ese momento. Héctor Orellana le pidió a su pareja Celia Beatriz Canelo Miranda mostrar el móvil a la acusada, reuniéndose ambas en el lugar de trabajo de la primera. En esa ocasión, la víctima Celia Canelo Miranda, le manifestó a la acusada que ella tenía también a la venta su vehículo marca Chevrolet, Modelo Trailblazer II, placa patente BSDR-31, entusiasmándose la acusada con la descripción de este vehículo, pidiendo que le fuera exhibido, lo cual se concretó momentos más tarde. El mismo día 19 de abril, en horas de la noche, el supuesto Walterio Leyton llamó telefónicamente a Héctor Orellana, señalando que a su supuesta hija Francisca –la acusada- le había agradado mucho el segundo móvil y que contaban con el dinero para comprarlo, acordando como precio la suma de \$7.000.000.-

Fue así que el día 20 de abril de 2016, alrededor de las 15.30 horas, la víctima se reunió con la acusada en una Notaría de San Fernando. En esta oportunidad, la acusada se hacía acompañar de un sujeto varón y de una mujer de nombre María del Pilar Acevedo Vásquez, a quien presentó como su tía. El precio de la compraventa se simuló pagar mediante depósito del cheque serie AY 5876225 de la cuenta corriente 62900073106 del Banco Estado de Chile, en la cuenta corriente de la víctima N° 70180547 del Banco BCI, depósito que en el mismo acto habría efectuado el supuesto padre de la acusada. La víctima revisó su cuenta bancaria por internet y al verificar que figuraba un saldo contable por el valor de la compraventa, concretó la compraventa del vehículo, para lo cual otorgó un poder especial a la supuesta tía María Acevedo Vásquez -a petición de la acusada, quien señaló estar cursando estudios superiores con sistema de beca, por lo que no podía figurar con vehículos a su nombre- para que en su nombre pudiera transferir el vehículo a un tercero, haciendo entrega material del vehículo a la acusada y sus acompañantes, quienes se lo llevaron de inmediato. Sin embargo, al día siguiente, el banco no liberó los fondos y procedió a protestar el cheque depositado por el supuesto padre de la acusada, toda vez que la cuenta no tenía fondos, se encontraba cerrada desde el año 2013 y la firma era visiblemente disconforme".
(sic)

A juicio del Ministerio Público los hechos antes descritos configuran **dos delitos de estafas**, previstos en el artículo 468 del Código Penal en relación con el artículo 467 N° 1 del mismo cuerpo legal, y **dos delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso** del artículo 198 del Código Penal; delitos todos que se encuentran en grado de desarrollo de **consumados**, en los cuales le ha correspondido a la acusada una participación en calidad de **autora**, según lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

No se invocaron circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Solicitó en consecuencia se aplique a la acusada por el delito reiterado de estafa (sic) la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 15 unidades tributarias mensuales; las accesorias legales generales y las costas de la causa. Por el delito reiterado de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, solicitó la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 10 unidades tributarias mensuales; las accesorias legales generales y las costas de la causa.

Es así como, en su **alegato de apertura**, la fiscal señaló que se acreditarían los hechos de la acusación y se contaría con diversa prueba, siendo relevante la declaración de los dos afectados, como de un testigo -pareja de una víctima-,

quienes darían detalles de la ocurrencia de los hechos, de cómo hubo una puesta en escena de parte de la acusada para generar un contexto de querer adquirir dos vehículos. Indicó que son hechos coetáneos en el calendario, pero diferentes, al punto que las víctimas no se conocían. Sostuvo que se conocerían los pormenores de la historia y los motivos para no figurar por parte de la acusada y la presencia de una tercera persona, quien ya fue condenada por los mismos hechos en un juicio abrevado. Además, se acreditaría que los pagos fueron hechos con cheques de cuenta cerrada y que habían sido robados.

En definitiva, que se podría acreditar todos los elementos y se adquiriría por el tribunal la convicción de los dos ilícitos de estafa y de uso malicioso de instrumento mercantil privado falso, por lo que pediría un veredicto condenatorio.

En sus **alegaciones finales** indicó que se acreditaron ambos hechos y la calificación jurídica propuesta. Detalló, que ambas víctimas tenían puesto a la venta sus vehículos en un sitio web y fueron contactadas por un sujeto que dio el mismo nombre a ambas, fingiendo interés en comprar los autos para otra persona, que también fingió un nombre, el de Francisca Leyton, y que resultó ser la acusada, quien también tomó contacto telefónico con las víctimas y concertó encuentros para conocer y revisar los vehículos, fingiendo interés genuino en comprarlos, por lo que se juntó con los afectados el 20 de abril de 2016, en dos notarías, pudiendo ver un video del encuentro de Valderrama (víctima hecho 1), la acusada y la mujer que la acompañaba y respecto de la víctima del hecho 2, imágenes en las que, además, aparecía un varón. También se presentaron los documentos que se generaron en las notarías, como la carta de responsabilidad y el poder especial para que María Acevedo pudiera vender, transferir y disponer de ambos vehículos. De otra parte, la acusada dentro de esta puesta en escena, en concierto con un tercero, fingió el pago mediante engaño, el que se había acordado realizar por transferencia, pero se hizo con cheques que fueron depositados en cada una de las cuentas de ambas víctimas, los que pertenecían a una cuenta que estaba cerrada, y con el movimiento que aparece en las cartolas, ambos afectados incurren en error al ver que había un saldo contable, pero el dinero no fue liberado porque estaba cerrada la cuenta y, además, tenían firmas visiblemente disconformes. Luego, este engaño genera un error en ambos afectados, quienes suscriben un documento en notaría a nombre de quien fue coimputada y ya condenada por estos mismos hechos y proceden a la entrega material, cuidándose la acusada, como parte del ardid, de no figurar, argumentando ser estudiante y

correr riesgo de perder las becas, siendo en definitiva defraudado Felipe Valderrama en \$7.400.000 y Celia Canelo en \$7.000.000.

Agregó que concurren los elementos de la estafa, pues ha habido engaño, ardid, puesta en escena por parte de la acusada, hay nombres fingidos, cierto estatus social y económico, estudios superiores, trabajo en el SII, todo lo cual permitió generar confianza para contratar con la supuesta compradora e incurrir en el error como efecto del engaño al que fueron inducidos ambos afectados al ver el movimiento aparente en sus cuentas, dando por hecho que el dinero estaba a disposición de ellos y por ello firmar el contrato y disponer ceder los vehículos entregándolos a la acusada, quien se los lleva y toma posesión material de ellos.

Además, indicó que se pudo conocer las cartolas de las víctimas, copia de la boleta de depósitos en el caso de Celia Canelo y los cheques que fueron reconocidos por el carabinero Toy, en los que se señalan los nombres de ambas víctimas y en el reverso se consigna el número de las cuentas coincidentes con las de los afectados.

En relación con delito de uso malicioso de instrumento mercantil privado falso, sostuvo que se conocieron los cheques protestados, el oficio de Banco Estado en el que se daba cuenta de la titular de la cuenta y que estaba cerrada y el acta de protesto en ambos casos, en la que se señala que fue por firma visiblemente disconforme, con todo lo cual, estamos frente al delito contemplado en el artículo 198 en relación al 197 y 193 N° 1, todos del Código Penal.

Enseguida y respecto a la participación de la acusada, se acreditó que interactuó con cada una de las víctimas, reuniéndose con ellos para ver los vehículos, luego en la notaría para celebrar los contratos, de lo que hay videos. Además, las víctimas altamente proactivas y solo con la identidad de la mujer que firmó los contratos -María Acevedo- revisaron sus redes sociales y llegaron a la acusada que figuraba como amiga de la hija de María y ello llevó a establecer que quien decía llamarse Francisca Leyton era la acusada. Además, se contó con un oficio de la empresa Movistar en el que se informa sobre los números desde el que se comunicaban el supuesto padre de Francisca y ella y, el número que usó la acusada figura a nombre de Gabriel Barrio, el que según refirió Toy, es el padre de un hijo de la acusada, pero el rut asociado al número es el de la acusada. De igual forma se acompañó el tráfico de llamadas del 19 y 20 de abril de 2016 de los teléfonos de ambas víctimas y coinciden con los teléfonos usados para contactarlas.

Además, señaló que el vehículo de Valderrama se logró transferir a Elvis Montecinos; que Toy obtuvo antecedentes que ratificaron la participación de la acusada y se estableció la identidad del hombre que la acompañó al momento de revisar los autos e incluso en la notaría en el caso de Celia Canelo, e igualmente Canelo lo reconoció en set que hizo Toy. Igualmente, cada una de las víctimas reconocieron a la acusada en una diligencia practicada de acuerdo con los protocolos, siendo relevante que, la acusada, María y el acompañante registraban domicilios en Temuco, habiendo sido María ya condenada por los mismos hechos.

Finalmente, sostuvo que la acusada estaba concertada con el supuesto papá, sujeto que hizo las diligencias bancarias para que incurrieran en error y así disponer de sus vehículos, siendo defraudados en las sumas ya señaladas, por lo que se acreditó la comisión del delito de estafa, previsto en el artículo 468 en relación al 467 N° 1, ambos del Código Penal, al igual que el delito de uso malicioso de instrumento mercantil privado falso, por lo que pidió un veredicto condenatorio.

Al momento de la **réplica** señaló que el teléfono usado por la acusada estaba asociado a su rut, sumado a la información de tráfico de llamadas y el reconocimiento fotográfico al que se refirió Toy, cuyo set no se hizo con fotografías aportadas por las víctimas, sino con la que él obtuvo del Registro Civil, permitió acreditar la participación de la acusada.

TERCERO: POSICIÓN Y ARGUMENTACIONES DE LA DEFENSA.

La defensa planteó en su **alegato de inicio**, que pediría la absolución de la acusada, pues los hechos descritos no dicen relación con una actividad ilícita que haya desplegado aquella, sino que Walterio Leyton, ya que fue él quien hizo acuerdo con Orellana y Valderrama de comprarles sus vehículos, los que fueron en definitiva comprados por María Acevedo y, el pago se efectuó a través de cheques, que fueron protestados por firma disconforme y en el hecho 2 por falta de fondos.

Indicó, que podría haber figura de giro doloso de cheque u otra, pero no estafa y que la sanción debería ser en contra de Walterio Leyton o María Acevedo. Agregó, que respecto de Leyton no hubo diligencias de investigación, por lo tanto, no hay condena y en relación con María Acevedo si hubo condena, tal como dijo la fiscal. Además, señaló, que el ministerio público no dice que la acusada haya hecho una actividad, que actuó mediante engaño o que lo haya hecho con la intención de defraudar, por lo que no hay fraude, engaño o estafa de su parte, sino de la otra persona que fue condenada.

De otra parte, y luego de leer el artículo 467 del Código Penal, señaló que se debería probar que hay un título obligatorio, pero en este caso es entre otras personas, no con la acusada. Igualmente, el persecutor dice que la acusada sería autora ejecutora, pero eso no se precisa en la descripción los hechos, como tampoco alguna otra forma de participación.

Finalmente, indicó que los hechos no dan cuenta de un delito de estafa, al menos respecto de su defendida y, además, la prueba sería insuficiente e inidónea para acreditar su participación, por todo lo cual pediría la absolución.

En su **alegato de cierre** insistió en la absolución, argumentando que los hechos de la acusación no dan cuenta de una actividad delictual de parte de la acusada, sino de Walterio Leyton, quien hizo un acuerdo verbal o telefónico con las víctimas para adquirir sus vehículos, lo que fue ejecutado por María Acevedo, comprometiéndose Leyton a pagar, lo que se hizo por medio de depósito de cheque. Añadió que se trató de un error que no era inevitable ni forzado, pues las víctimas -un encargado de logística y otra una laboratorista dental- debieron saber que el saldo contable no es lo mismo que el disponible, lo que es de conocimiento común, por lo tanto, con una actividad mínima pudieron no dar lugar al negocio que se hizo con cheques robados. Sin embargo, no se dio ningún antecedente preciso y concreto del supuesto robo de los documentos, pues se indicó que la titular había cerrado la cuenta, pero nada se dijo sobre la pérdida o hurto de cheques o talonario, de modo que los cheques ninguna relación tienen con la acusada, pues el talonario se obtuvo de un teléfono, pero no se indicó de cuál. Además, los cheques fueron los rescatados por las víctimas, sin que se supiera quién los depositó. Asimismo, no se describe en la acusación que la acusada haya planificado los hechos o haya habido concierto previo entre ella, Leyton y Acevedo. Que la participación no se plasmó en la acusación, de manera tal que de establecer los hechos y el ánimo doloso se afectaría el principio de congruencia, al no describirse cómo se actuó conforme al artículo 467 N° 1, sin que el persecutor haya optado por otras figuras como la del 473, ambas normas, del Código Penal.

En cuanto a la afectación a la congruencia citó sentencia que absolvió a acompañante de autor.

Se dio cuenta de sesgo de confirmación porque no hay antecedentes serios o legítimos de cómo las víctimas obtuvieron información para establecer que Francisca era Isamar, pues ambos dijeron que fue a través de las redes sociales y funcionarios de Movistar; además Toy dijo que el reconocimiento no se hizo con

rueda de personas sino a través de la fotografía entregada por las víctimas y con estos antecedentes él saca una foto en blanco y negro del Registro Civil, siendo esta diligencia inidónea para vincular a su defendida con la persona que había participado en los hechos, sin que las víctimas dieran las características de la persona a reconocer, como dijo Toy, quien sostuvo que el acta no indica las características, sino que se guía por la fotografía que los propios afectados llevaron. Cita estudio de Paz Ciudadana en relación con la alteración de la memoria de los afectados, sin que se haya hecho investigación más allá de lo que hicieron las víctimas, que no son actores de investigación. Además, los afectados no dieron antecedentes de la acusada, no se entregaron datos para tener comparación o coincidencia con la acusada.

Añadió, que con la prueba hay dudas razonables sobre la participación de la acusada y ello deja subsistente la presunción de inocencia, por lo tanto, debe dictarse una sentencia absolutoria, pues la carga de la prueba corresponde al Estado y no se logró satisfacer el estándar probatorio, siendo claro Toy al decir que pidió una diligencia antropomórfica para ver si había coincidencia, lo que no se exhibió en el juicio, es decir, otro motivo más de incertidumbre y debiera ser absuelta.

En la **réplica** expuso que el reconocimiento no se hizo en la forma institucional y que el rut que se indica en Movistar no señalaron que Barro no existía y no lo pudieron encontrar por lo tanto no es un antecedente idóneo para imputar la participación.

CUARTO: VERSIÓN DE LA ACUSADA. La encartada ejerció su derecho a guardar silencio, de modo que no prestó declaración en la audiencia de juicio oral.

A su vez, en la oportunidad reservada durante el juicio para sus **palabras finales**, indicó que, si la iban a condenar que no fuera por tanto tiempo, ya que tiene dos hijos.

QUINTO: CONVENCIONES PROBATORIAS. Los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

SEXTO: PRUEBA RENDIDA EN EL JUICIO. El **Ministerio Público** aportó como **prueba testimonial** las declaraciones de Felipe Alejandro Valderrama González, Celia Beatriz Canelo Miranda, Héctor Hugo Orellana Vergara, Walter Toy Peralta y Cristian Eduardo Marambio Guajardo.

Como **Prueba Documental** incorporó Certificado de Anotaciones Vigente del vehículo PPU CHCK-63; Certificado de Anotaciones Vigentes del vehículo PPU

BSDR-31; Carta de Responsabilidad de 20 de abril de 2016, suscrito por María del Pilar Acevedo Vásquez, ante Notario Carlos Guzmán, de San Fernando; Poder Especial de Vehículo Motorizado de 20 de abril de 2016, suscrito por Felipe Valderrama González, ante notario Carlos Guzmán de San Fernando; Revocación de Poder Especial de Vehículo Motorizado de fecha 21 de abril de 2016, suscrito por Felipe Valderrama González, ante notario Carlos Guzmán de San Fernando; Poder Especial de Vehículo Motorizado de 20 de abril de 2016, suscrito por Celia Canelo Miranda, ante Primera Notaría de San Fernando; Oficio de Agente de Banco Estado de 11 de mayo de 2016, informando estado de cuenta corriente N° 62900073106; Certificado de Inscripción R.V.M. de vehículo PPU CHCK-63 a nombre de Elvis Montecinos Verdugo; Ordinario N° 04 del Jefe Subdepartamento Registro de Vehículos Motorizados, con anexos de Solicitud de Transferencia N° 7754, de vehículo patente CHCK-63 y Declaración de transferencia de vehículo; Contrato de Compraventa de Vehículo, celebrado entre María del Pilar Acevedo Vásquez, en representación de Felipe Valderrama González y Elvis Montecinos Verdugo de 25 de abril de 2016, suscrito ante Notario Carlos Alarcón de Temuco y copia de Formulario 23; Estado de saldo de cuenta N° 41441044 BCI, de Felipe Valderrama González; Estado de saldo cuenta corriente N° 70180547 BCI, de Celia Canelo Miranda, y Oficio de Empresa MOVISTAR N° 3929/2016, de 12 de octubre de 2016, por el que informa titulares de teléfonos celulares números 941327142 y 985170648, con anexo de resumen tráfico de llamados del día 19 y 20 de abril de 2016.

Como **prueba material** se incorporaron dos cheques de la cuenta corriente N° 62900073106 del Banco Estado de Chile.

Finalmente, **como otros medios de prueba** un set de ocho fotografías de los dos vehículos afectados y sitio del suceso; un set de dos fotografías del talonario de cheques que habrían sido utilizados por la acusada para simular el pago de los dos vehículos; nueve capturas de pantallas de comunicaciones vía WhatsApp, entre el contacto utilizado por acusada y las dos víctimas, y un conjunto de cuatro fotografías de captura de cámara de seguridad de Segunda Notaría de San Fernando del día 20 de abril de 2016.

La **defensa** por su parte se adhirió a la totalidad de la prueba aportada por el Ministerio Público y no ofreció prueba propia.

SÉPTIMO: DECISIÓN DEL TRIBUNAL. Tal como se dio a conocer en el veredicto, este Tribunal por unanimidad decidió **absolver** a **Isamar del Carmen**

Lermenda Rocha de la imputación de ser autora de dos delitos consumados de **uso malicioso de instrumento mercantil privado falso**, previsto y sancionado en el artículo 198 en relación con el 197 y 193 N° 1, todos del Código Penal, por el cual fue acusada por el Ministerio Público.

Por el contrario, y con el mismo quorum, **condenarla** por su responsabilidad en calidad de **coautora** de **dos delitos consumados de estafa**, previsto en el artículo 468 del Código Penal en relación con el artículo 467 N° 1 del mismo cuerpo legal, por hechos ocurridos en la comuna de San Fernando, el 20 de abril de 2016, en perjuicio de Felipe Alejandro Valderrama González y Celia Beatriz Canelo Miranda.

OCTAVO: ANÁLISIS DE LA PRUEBA APORTADA RESPECTO DE LOS DELITOS DE ESTAFA Y MOTIVOS DE LA DECISIÓN CONDENATORIA. El delito imputado, conforme al tipo penal descrito en el artículo 468 del Código Penal y según lo que de modo uniforme y sostenidamente han planteado los principales tratadistas en la materia y la jurisprudencia de nuestros altos tribunales, requiere para su consumación -en lo atinente a este caso- los siguientes requisitos copulativos: a) *la existencia de un engaño, ardid o mentira por parte del sujeto activo a la víctima*; b) *el error o falsa representación de la realidad provocada en esta última a consecuencia de esa maniobra de engaño*; c) *la disposición patrimonial efectuada por la víctima*; y d) *el perjuicio que sufre la víctima*. Se agrega o explica usualmente el delito, además, diciendo que *debe existir una relación de causalidad o encadenación entre cada uno de estos elementos*.

Luego, y para una mejor comprensión de los hechos se analizarán los medios de prueba de manera separada conforme digan relación con el hecho 1 o 2, sin perjuicio que, como se podrá conocer, el *modus operandi* en ambos casos es el mismo.

Respecto del hecho 1, en que fue víctima Felipe Alejandro Valderrama González, pudimos contar primeramente con el testimonio de esta persona, quien en detalle expuso que en abril del año 2016 puso su vehículo KIA Sportage, PPU CHCK-63, año 2010, 4 x 4, en venta a través de una plataforma digital en la suma de \$7.400.000. La existencia del referido automóvil, las características aludidas y la circunstancia de ser su propietario a la fecha de venta, pudimos corroborarlas a través del **Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. del Registro Civil** y de la **fotografía N° 2 del set 1** que le fue exhibida, en la que identificó su vehículo.

Añadió, que el 18 de abril fue contactado por un hombre que se hacía llamar Walterio Leyton, señalando que estaba interesado en comprarle el auto, pero para su hija Francisca Leyton. Coordinaron que se iban a reunir al día siguiente en una determinada calle de San Fernando, lugar hasta donde llegó la supuesta hija, que estaba embarazada y era menuda, en compañía de un hombre que dijeron era mecánico, el que no se identificó. A estas personas les mostró el auto, ellos lo revisaron, el mecánico interfirió hartó, pero el visto bueno lo dio Francisca, la que se mostró interesada y quedó de hablar con su padre para que se lo comprara.

Además, señaló que durante la tarde de ese mismo día recibió un nuevo llamado de Walterio diciéndole que a su hija le había encantado el auto y que hicieran la compraventa, para lo cual acordaron el precio de \$7.400.000, y que el pago se haría a través de transferencia bancaria, quedando en juntarse en una de las dos notarías existentes en San Fernando. Luego, el día 20 de abril llegó hasta la notaría y se reunió con Francisca Leyton la que iba acompañada por una señora que se hacía pasar por su tía, de nombre María del Pilar Acevedo Vásquez. En esa ocasión Francisca le contó que estaba estudiando y por eso no podía aparecer en el sistema con propiedades porque iba a perder las becas, por lo que necesitaba que él le diera un poder a su tía para no figurar ella como dueña y poner en riesgo sus beneficios estudiantiles, a lo que accedió.

Contó asimismo, que estando en la notaría, junto a ambas mujeres, revisó su cuenta bancaria y aparecía saldo contable por el precio de venta acordado y pensó que el dinero estaba ya en su cuenta, pues nunca acordaron ni menos le dijeron que el pago se había hecho con un cheque, procediendo a firmar el poder a nombre de la tía con la finalidad que hicieran la transferencia en los días siguientes y luego de ello a hacer entrega material de su vehículo, el que había dejado estacionado en las cercanías. Hasta ahí todo bien, pero durante la noche comenzó a tener sospechas del pago e intentó contactarse con Francisca por teléfono, pero ya no le contestó más. Por su parte Walterio, quien le dijo que trabaja en faenas y tenía mala conexión y que por eso no siempre contestaba el teléfono, le mandó por WhatsApp fotografías del talonario de cheques de la cuenta con la que se había efectuado el pago, para que se quedara tranquilo, dándose cuenta al día siguiente que el pago fue hecho con un cheque que había sido protestado por firma disconforme y que correspondía a una cuenta bancaria de una sucursal de Temuco que había sido cerrada en el 2013. Añadió que se enteró que había otra víctima de nombre Celia Canelo, por lo que concurrió a la PDI a hacer la denuncia y a la

fiscalía, donde conoce a la otra afectada y juntos comienzan a hacer averiguaciones.

La declaración de este deponente fue clara, detallada y respaldada por otros medios de prueba, lo que permitió estimarla creíble, siendo así que se incorporó a través de su exhibición las **dos fotografías (set 2) del talonario de cheques** que le fueron enviadas por WhatsApp por el supuesto padre de Francisca, en las que se pudo apreciar que correspondían a la cuenta corriente N°62900073106. Dicha cuenta es coincidente con el cheque que fue presentado a depósito en Banco Estado para el pago y que fue protestado por los mismos motivos que esgrimió la víctima, lo que se pudo confirmar por medio de la **exhibición del cheque** a nombre de Felipe Valderrama González, serie AY5876221, con fecha 20 de abril de 2016 por la suma de \$7.400.000.- al funcionario de la SIP **Walter Toy Peralta**, en el que se encuentra adosada el **acta de protesto** de fecha 21 de abril de 2016 a las 09.01 minutos, en la sucursal del Banco Estado de San Fernando.

Asimismo, se le exhibió a la víctima la **fotografía de un pantallazo** (documento 12) de la cartola de su cuenta del banco BCI N° 41441044, en la que figura el día 20 de abril de 2016 un depósito de cheque de otro banco por la suma de \$7.400.000.- y, al día siguiente, la devolución del cheque depositado por la misma suma de dinero, concordando el número de cuenta con la que se anota al reverso del cheque al momento de ser presentado a depósito y que fue protestado y recuperado por el afectado, al que ya se hizo alusión.

Igualmente, se contó con un **oficio remitido desde el Banco Estado a la fiscalía** de mayo de 2016, en el que se corrobora que la cuenta corriente N° 62900073106 a nombre de María Brito Salgado, desde la cual se había extraído el cheque, se encontraba cerrada desde el 5 de abril de 2013, lo que confirmó los dichos del afectado.

Recordó también Felipe Valderrama, que aportó al momento de declarar durante la investigación, en abril del mismo año, los números de teléfonos desde los cuales se contactaban la mujer que decía llamarse Francisca Leyton y el sujeto que se hacía llamar Walterio Leyton, correspondientes al 941327142 y 985170648, y que estos números de teléfonos, en conjunto con el nombre de la supuesta tía, María Acevedo Vásquez, sirvieron para el inicio de la investigación. Detalló, que en conjunto con la otra víctima, Celia Canelo, lograron averiguar que un chip de uno de esos teléfonos estaba inscrito a nombre de Gabriel Barrio, lo que el tribunal pudo confirmar con el **oficio emitido por la empresa Movistar** a la fiscalía de

octubre de 2016, en el que se indica que el número del cual se contactaba Francisca Leyton (941327142) estaba a nombre de Gabriel Elías Barrio López, sujeto que en las redes sociales aparecía como amigo de una mujer de nombre Isamar Lermenda, cuyo rostro del perfil de Facebook era el de la aludida Francisca Leyton, la que aparecía en fotografías jactándose de la plata que habían ganado con la estafa.

Tales afirmaciones fueron respaldadas por el testimonio de la otra víctima de esta causa, **Celia Canelo Miranda**, afectada en el hecho 2 por el mismo delito, a quien le fueron exhibidas **3 fotografías** (7, 8 y 9 del set 3) en las que reconoce a la mujer que se hacía pasar por Francisca Leyton y que tiene en su perfil el nombre de Isa Lermenda Rocha y publica fotos de fajos de billetes de \$10.000.- y de \$20.000.- junto a comentarios en los que presumía que ahora ella también puede mostrar mucho dinero.

Sostuvo también Felipe Valderrama que en coordinación con Celia Canelo pudieron ligar a la presunta tía María del Pilar con el nombre de Isamar Lermenda ya que la hija de la primera era amiga de Isamar en Facebook, agregando que toda esa información se la entregaron al carabinero Walter Toy para que siguiera investigando.

El completo, claro y detallado relato de Felipe Valderrama, fue avalado también en cuanto a la presencia de las dos mujeres junto a él en la notaría, a través de la exhibición que se le hizo de **4 imágenes** (del set 4) que fueron obtenidas desde la cámara de seguridad del referido recinto, según indicó el funcionario de la SIP de carabineros, **Walter Toy Peralta**, a través de las cuales Valderrama explicó la presencia y ubicación de Francisca Leyton, María Acevedo Vásquez y de él, imágenes en las que aparece consignada la fecha 20 de abril 2016, y en horarios cercanos al mediodía.

Igualmente, permitieron corroborar los dichos de esta víctima, la incorporación del documento notarial denominado **Poder Especial Vehículo Motorizado** de 20 de abril de 2016, correspondiente a una copia en la que se indica que Felipe Valderrama González confiere poder especial y amplio a María Acevedo Vásquez para auto contratarse, vender, ceder y transferir el vehículo de propiedad del primero; otro documento titulado **Carta de Responsabilidad**, de igual fecha, en la que se lee, en lo relevante, que María Acevedo se responsabiliza total y exclusivamente del vehículo, como por ejemplo, de los daños, infracciones y sanciones, desde el 20 de abril en adelante; y el documento notarial llamado **Revocación Poder Especial Vehículo Motorizado**, fechado el 21 de abril de 2016, a

través del cual el afectado revoca y deja sin efecto el poder, lo que concuerda con el conocimiento que tuvo de la ausencia del pago por la entrega de su automóvil y su interés de frustrar el acuerdo.

La **declaración de este afectado**, además de haber sido avalada por los medios de prueba ya analizados, fue mantenida en el tiempo, lo que se concluyó a partir de la declaración del funcionario a cargo de la investigación, el ya aludido policía **Walter Toy**, quien durante el mismo mes de abril de 2016 lo entrevistó, declarando en juicio haber obtenido el relato de manera coincidente con el que entregó Valderrama en el juicio. Además, fue respaldado por el testimonio de **Cristian Marambio Guajardo**, quien contó que mientras se encontraba de servicio de guardia en la PDI de esta comuna el 21 de abril de 2016 recibió la denuncia de Felipe Valderrama, en los mismos términos a los que esta víctima expuso en el juicio, el que le hizo entrega de copia de los documentos notariales, pantallazos de las conversaciones con Walterio Leyton y del cheque protestado.

Como corolario de la fatídica venta de su vehículo, **Felipe Valderrama** señaló que logró recuperarlo en la ciudad de Temuco, pero para eso tuvo que volver a comprarlo a un tercero y pagar \$3.000.000.-, lo que hizo para no perder tanto y porque María Acevedo Vásquez (la tía) había alcanzado a transferir el vehículo a Elvis Montecinos, a quien contactó y, según le dijo, a él también lo habían perjudicado.

Esta última transferencia, de la que también dio cuenta el funcionario de la SIP **Walter Toy**, se pudo corroborar a través del **Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. del Registro Civil** emitido el 26 de mayo de 2016 en el que aparece como propietario del vehículo PPU CHCK-63, Elvis Montecinos Verdugo, con fecha de adquisición el 24 de abril de 2016, vale decir, 4 días después del engaño del que fue víctima Felipe Valderrama, documento al que se adjunta la **solicitud de transferencia** que fue remitida vía oficio a la fiscalía desde la oficina del Registro Civil.

Igualmente, se incorporó copia del **contrato de compraventa entre María Acevedo y Elvis Montecinos** y adjunto formulario 23 (sobre pago de impuesto por la compra) respecto al aludido vehículo, firmado ante notario público de Temuco el 25 de abril de 2016, en el que se lee que comparece como vendedora María del Pilar Acevedo Vásquez, en representación de Felipe Valderrama, aludiendo al poder especial que este le había conferido el 20 de abril, la que vende, cede y

transfiere a Elvis Montecinos Verdugo el vehículo, en la suma de \$3.500.000.- los que fueron pagados en dinero en efectivo.

La comparecencia de María Acevedo en esa notaría de Temuco, tira por la borda la versión que aquella dio al funcionario **Walter Toy**, quien logró ubicarla durante la investigación, en tanto señalaba que había sido engañada por Walterio Leyton y su hija, ya que el hombre le había dicho que trabajaba en el SII, tenía una empresa en Santiago y quería comprar teléfonos para todos sus trabajadores y le pidió, como vendedora de Movistar, que viajara con él a Santiago para ofrecerlos, realizando el viaje ambos en bus, pero que en el camino a esa ciudad el hombre le solicitó como favor que ayudara a su hija Francisca en unos trámites, lo que aceptó, bajándose ella sola en San Fernando y acudiendo supuestamente a dos notarías, donde participó en los hechos narrados y que culminaron con dos vehículos adquiridos a su nombre, para luego, en horas de la tarde, continuar su viaje a Santiago para encontrarse con Leyton, pero este nunca llegó.

Esta historia contada por María Acevedo a **Walter Toy** y que tenía por objeto desvincularse de la acusada, se apreció por estos jueces como inverosímil, ya que quedó en evidencia que su participación en los hechos asociados a esta causa no se limitó al día 20 de abril de 2016. En efecto, ello por cuanto, 4 días después, se presentó en una notaría de Temuco para la celebración de la venta del vehículo a Elvis Montecinos, episodio que no comentó al policía, desechando la versión del engaño en su contra y dando fuerza a la versión de las víctimas, pues esta mujer, lejos de negar su presencia en las notarías de San Fernando, junto a Isamar Lermenda, trata de justificarla.

Por otro lado, en cuanto al hecho 2 que afectó a la víctima **Celia Beatriz Canelo Miranda**, del análisis de la prueba aportada se pudo establecer una forma de actuar de la acusada junto María Acevedo Vásquez y un sujeto que las acompañaba, evidentemente similar a la que desplegaron en el caso de Felipe Valderrama. Así lo contaron la propia afectada Celia Canelo Miranda y su pareja Héctor Orellana Vergara.

El **último de los nombrados** expuso que, en marzo o abril del año 2016, publicó un aviso en Chileautos de venta de su vehículo y lo contactó una persona que decía llamarse Walterio Leyton. Aquel sujeto llamó al teléfono de su señora, ya que los teléfonos de ambos aparecían en la publicación, pero fue él quien habló con el hombre, quien le dijo que trabajaba en el SII en Valdivia y que estaba interesado en comprar el vehículo para su hija de nombre Francisca Leyton, que estudiaba en

Rancagua. Por lo anterior, le solicitó que, en caso de concretarse la compra, el auto debía quedar a nombre de una tercera persona para no tener problemas en el SII y para que su hija no perdiera las becas estudiantiles que tenía.

Añadió que de inmediato acordaron que al día siguiente iría su hija a conocer el vehículo, lo que se concretó en horas de la tarde, por lo que, debido a que no se encontraba en San Fernando, le pidió a su señora que se lo mostrara. Contó también que su mujer -Celia- le comentó que efectivamente la mujer fue a ver el auto y que ella le había dicho que tenía otro auto en venta que era de su propiedad, un Chevrolet Trailblazer, color negro PPU BSDR-31, año 2008, el que Francisca Leyton se interesó en conocer. Por esa circunstancia y debido a que él (deponente) andaba en ese vehículo es que se trasladaron hasta Pelequén la supuesta Francisca Leyton, que era una mujer joven, en estado de embarazo, y un hombre que la acompañaba, el que se limitó a sacar fotos del vehículo y no habló nada. Agregó, que Francisca se presentó cordialmente y le señaló que le encantaba el auto, que lo quería porque era grande, por seguridad para su embarazo y por la llegada de su hijo, quedando de hablar con su padre para que se lo comprara. Luego, en horas de la noche del mismo día, lo volvió a contactar por teléfono Walterio Leyton el que le manifestó que le quería comprar el auto, de modo que coordinó todo para que su señora, por ser la dueña, se reuniera con Francisca en la notaría, ya que él por trabajo no iba a estar en San Fernando, y acordaron que el precio de venta sería de \$7.000.000.- pagadero en efectivo o transferencia electrónica y que dicho pago lo haría Walterio.

Recordó que le preguntó al hombre si tenía tope para hacer transferencias y este le dijo que no había problemas porque tenía 2 cuentas bancarias.

Agregó que al día siguiente su mujer lo llamó para decirle que ya tenía la plata de la venta en su cuenta, lo que vio a través de su teléfono, por lo que se hizo todo el papeleo en una notaría y fue entregado el vehículo. Dijo también que junto a Francisca andaba una mujer que se hacía pasar por su tía, de nombre María Acevedo Vásquez. Sin embargo, posteriormente su mujer se percató que le habían pagado con el depósito de un cheque robado y de una cuenta que había sido cerrada en el año 2013.

La versión de **Orellana Vergara** resultó creíble, al ser concordante plenamente y, además, complementaria, con la de su pareja **Celia Canelo** y, asimismo, al ser sostenida en el tiempo, pese a los años transcurridos, como quedó en evidencia al considerar el relato del aludido funcionario de la SIP **Walter Toy**,

quien en el curso de la investigación le tomó declaración, como lo sostuvo en el juicio.

Con mayor detalle y precisión, pero de manera concordante en lo medular y pertinente, declaró la propia afectada, **Celia Canelo Miranda**, propietaria del vehículo aludido anteriormente, cuya existencia, características y la calidad de ser propietaria a la fecha de los hechos -20 de abril de 2016- pudimos corroborarlas a través de la incorporación del **Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. del Registro Civil**, vehículo que pudimos apreciar en la **fotografía 1** (set 1) que le fue **exhibida a la deponente**, como también en las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de un estacionamiento, a las que se hará referencia más adelante.

Esta deponente ratificó los dichos de Hugo Orellana Vergara respecto a la publicación del vehículo en Chileautos, la comunicación telefónica con el sujeto de nombre Walterio Leyton el día 18 de abril de 2016 y el tenor de aquella conversación, añadiendo que al día siguiente la contactó Francisca Leyton para que le mostrara el vehículo ya que ella se movilizaba en él. Sostuvo que esta mujer medía entre 1,50 a 1,55 de estatura, era de pelo largo, se encontraba embarazada de unos 7 meses y tenía como 22 años, la que revisó el auto y dijo que iba a hablar con su papá para que se lo comprara. También contó que le ofreció a Francisca su vehículo que igualmente tenía a la venta y ella se interesó, diciéndole que era más grande y seguro, considerando su estado de embarazo, de modo que fueron a conocerlo a Pelequén, pues su pareja lo tenía allí.

Esta testigo refirió lo que supo de parte de Orellana en términos similares a lo que aquel declaró en el juicio, en cuanto a la actitud que tuvo la mujer y el interés que mostró por comprar el auto, al igual que la conversación que mantuvo su pareja con Walterio para concretar el negocio, pero respecto del vehículo de su propiedad.

Agregó que el 20 de abril, como a las 3.15 de la tarde, llegaron hasta la notaría de calle Chillán de San Fernando, Francisca junto a una señora de unos 50 a 55 años y un joven que siempre estaba con la cabeza agachada, el que no entró. Francisca le dijo que la mujer era su tía María del Pilar Acevedo Vásquez y que necesitaba que hicieran los papeles de la venta a nombre de ella porque no podía figurar la compra a su nombre, pues estudiaba en Inacap de Rancagua y podía perder las becas; además le contó de su hijo que estaba por nacer, del nombre que

le iba a poner y le creyó todo. Añadió que hay una imagen obtenida de la cámara de la notaría en la que se ven ella, la acusada y la supuesta tía.

Expuso, además, que revisó desde la aplicación de su teléfono cerca de las 3 de la tarde y aparecían depositados los 7 millones de pesos en su cuenta bancaria, pero no salía especificado de qué forma se habían pagado, monto que, conforme lo acordado con Walterio, se iba a enterar a través de transferencia.

Esta información sobre la forma de pago y el acuerdo con Walterio Leyton fue refrendada a través **de 3 imágenes** (1, 2, y 3 del set 3) obtenidas de su teléfono celular (pantallazos) que aportó a la investigación, lo que también aseveró el carabinero Walter Toy, en las que se aprecia la conversación por WhatsApp entre Walterio Leyton y Celia Canelo con fecha martes 19 de abril, en la que se coordina la forma de pago, el hombre le pide los datos para transferirle los 7 millones en 2 pagos de 5 y 2 millones, uno enseguida del otro, entregando la víctima precisamente el número de cuenta en el que finalmente se depositó el cheque falsificado y de una cuenta cerrada.

Continuó señalando la testigo que, al ver que el depósito estaba en su cuenta, pensó que estaba todo correcto, era su primer vehículo y confió porque Walterio dijo que trabajaba en el SII y la niña estaba embarazada, no representándose la posibilidad de un engaño. Por esas circunstancias es que se hicieron los trámites y se firmó todo. Posteriormente, como a las 4, se fueron hasta el estacionamiento donde tenía el auto y se lo entregó a Francisca, de todo lo que hay imágenes que se obtuvieron de las cámaras de seguridad del referido recinto (fotos 4, 5, 6, 7 y 8 del set 1), exhibidas y reconocidas por esta testigo.

Las fotos indicadas fueron un factor de corroboración de sus dichos. En efecto, en ellas pudimos ver los jueces **la notaría y el estacionamiento** a que hizo mención la víctima y que le fueron exhibidas, en las que reconoció en la **foto 3** del set 2, a Francisca o Isamar y detrás de ella a la tía que estaba con lentes y, cerca de Francisca, la propia deponente; en la **foto 4** señala que aparece ella pagando en la caseta del estacionamiento y a su costado María del Pilar; en la **foto 5** se aprecia caminando hacia el vehículo junto a Francisca y María del Pilar; en la **foto 6** mostrándoles el auto a las mujeres e incluso recuerda que la tía sorprendida le dijo a Francisca “Ohh, tremendo auto que te compraste”; en la **foto 7** ella despidiéndose del cajero del estacionamiento; y en la **última imagen** se aprecia saliendo en su auto las dos mujeres y el hombre que las acompañaba, el que se fue

manejando. En esta última fotografía aparece la fecha y hora correspondiente al 20 de abril de 2016, 16:29 horas.

Celia Canelo contó a continuación que ese mismo día durante la tarde le escribió Walterio preguntándole si se había realizado la transferencia y la entrega del auto, respondiéndole que sí, y que su hija se había ido muy feliz. Dicha información se corroboró a través de la exhibición a la deponente de la **imagen 4 del set 3** que contiene un pantallazo de la conversación por WhatsApp en esos términos.

Hasta aquí la declaración de **Celia Canelo**, la que fue conteste en todos los aspectos con la de su pareja **Hugo Orellana** y, además, corroborada por diversos elementos periféricos, además, mantenida en el tiempo, al igual que la de su pareja, tal y como se evidenció gracias al testimonio del policía **Walter Toy Peralta**, quien los entrevistó a ambos y así lo contó en el juicio.

Otro elemento de prueba que permitió avalar los dichos de esta víctima fue el documento titulado **Poder Especial**, firmado ante notario de San Fernando el 20 de abril de 2016 entre aquella y María del Pilar Acevedo Vásquez, a través del cual la primera otorga poder amplio a la segunda para que en su nombre y representación venda, ceda y transfiera el vehículo Chevrolet PPU BSDR-31.

Señaló también Celia Canelo que el día 21 de abril revisó la aplicación de su banco BCI y observó que aparecían los 7 millones con un signo menos (-) y en rojo, por lo que muy preocupada llamó a su pareja que estaba en Copiapó y junto con ello se contactó con su ejecutivo, el que le confirmó que el cheque con el que se le había pagado el vehículo había sido rechazado, y le envió una fotografía del documento, el que incluso tenía faltas de ortográficas.

Esta última información se pudo corroborar a través de la **imagen** (pantallazo) que le fue exhibida de la **cartola de su cuenta bancaria** en la que figura con fecha 20 de abril de 2016 un depósito con cheque por \$7.000.000 en color verde y al día siguiente y en color rojo aparece la devolución del cheque depositado por el mismo monto, concordando con la información aportada por la víctima.

A continuación, agregó **Celia Canelo**, que el 22 de abril su ejecutivo del banco le mostró el cheque rechazado y la papeleta de protesto, el que pertenecía a la cuenta de una señora que había sido cerrada en el año 2013.

El referido documento fue conocido por el tribunal gracias a la **exhibición del cheque** al funcionario de la SIP **Walter Toy Peralta** en el que lee que fue

extendido a nombre de Celia Beatriz Miranda (se omite el segundo apellido) con fecha 20 de abril de 2016 por la suma de \$7.000.000.- y por un monto escrito de “ciete millones”, al que se encuentra adosado el **acta de protesto** de fecha 21 de abril de 2016 a las 09.01 minutos, en la sucursal del Banco Estado de San Fernando por firma visiblemente disconforme, con timbre que dice: “cuenta cerrada”.

Aquel cheque corresponde a la misma cuenta que figura en el talonario que pudimos apreciar en la **fotografía exhibida a la otra víctima, Felipe Valderrama**, y que como dijo, le fue enviada por WhatsApp desde el teléfono usado por Walterio Leyton.

También sostuvo **Celia Canelo**, que habló por teléfono con Francisca y que registró su número de teléfono el que recordó correspondía al 941327142, mismo número que señaló **Felipe Valderrama**.

Terminó declarando que, después de lo ocurrido, se enteró que otra persona de nombre Felipe también había sido estafado, con quien se logró comunicar para poder reunir antecedentes. Afortunadamente, ella tuvo un poco más de suerte que Felipe Valderrama, ya que, según señalaron **aquella**, su pareja, **Hugo Orellana**, y **el funcionario policial Walter Toy**, la denuncia inmediata permitió a la policía realizar una búsqueda y recuperar el auto, aunque presentaba algunos daños -no tenía la antena, un espejo retrovisor ni las llaves-, como precisó **Hugo Orellana**, debiendo trasladarlo en grúa desde Temuco, donde fue encontrado, hasta San Fernando.

NOVENO: SOBRE LA FORMA EN LA QUE AMBAS VÍCTIMAS PUDIERON DAR CON LA IDENTIDAD DE ISAMAR LERMANDA ROCHA.

Tanto **Felipe Valderrama** como **Celia Canelo**, declararon directamente en el juicio y ante el policía **Walter Toy** y, además, el primero de ellos ante funcionario de la PDI **Cristian Marambio**, que al día siguiente de la venta de sus vehículos se percataron que el pago no se había realizado de la forma acordada y que por el contrario habían sido engañados por Francisca Leyton. Que se contactaron entre ellos y comenzaron a reunir los antecedentes para ubicar a la mujer, ya que después del encuentro con ellos en las notarías dejó de contestarles el teléfono.

Que verificaron que había coincidencia en los números de teléfonos desde los cuales habían sido contactados, así como en toda la historia previa que les contaron para que se concretara la venta, es decir, la llamada de un hombre que decía ser el padre de Francisca, de nombre Walterio Leyton, los motivos

esgrimidos por la mujer para que no quedaran los automóviles a su nombre y en todo lo demás.

Luego, **ambos afectados** declararon que fue la víctima Celia Canelo a través de una persona que conocía de la empresa Movistar la que averiguó que el chip del teléfono del cual los contactaba Francisca Leyton se encontraba a nombre de Gabriel Barrio López, pero asociado a un rut que no correspondía a ese sujeto.

Que enseguida buscaron a través de la red social Facebook el perfil de la supuesta tía de Francisca, María del Pilar Acevedo Vásquez, de quien tenían la real individualización, pues ella fue quien firmó ante notario los documentos de rigor y llegaron a ubicar a una hija de María Acevedo, la que, a su vez tenía como amiga en la misma red a la mujer que habían conocido como Francisca Leyton, a quien de inmediato reconocieron por su foto de perfil, pero la imagen estaba asociada a otro nombre, el de Isa Lermenda Rocha. Tal **fotografía** del perfil de Facebook el tribunal pudo observarla, al serle **exhibida a Celia Canelo**, como se señaló en los párrafos precedentes.

Cabe hacer presente que, como se estableció a través de las declaraciones de los dos afectados, ambos mantuvieron no solo contacto telefónico con la acusada, sino que, en persona, en dos ocasiones y por un tiempo prolongado, pues se reunieron con ella para mostrarles sus vehículos y posteriormente en las notarías, de modo que no tuvieron duda de que la mujer de nombre Isa Lermenda Rocha era la misma que se había hecho pasar por Francisca Leyton.

Además, **ambas víctimas** contaron que pudieron ir ratificando la vinculación de Isamar Lermenda Rocha con el nombre de Francisca Leyton, pues con la ayuda del funcionario de la SIP a cargo de la investigación, **Walter Toy Peralta**, y con información **oficial de la empresa Movistar**, a la que ya se hizo alusión, se estableció que el rut asociado al número de teléfono 941327142 del que los había llamado Francisca, figuraba a nombre de Gabriel Elías Barrio López, pero con el rut de Isamar Lermenda Rocha: 18.070.541-4, tal como también lo contó **Toy** en el juicio y se pudo comprobar con el aludido **oficio enviado desde Movistar a la fiscalía**.

De igual forma señalaron **Felipe Valderrama** y **Celia Canelo** a través del testimonio entregado a **Walter Toy**, que buscaron en Facebook a Gabriel Barrio y tenía como contacto a Isamar Lermenda, quedando debidamente asentado que Gabriel Barrios e Isamar Lermenda se conocían perfectamente ya que, según lo averiguó **Walter Toy** y lo expuso en el juicio, se percató, a través de la información

de Registro Civil, que Isamar Lermenda Rocha tenía un hijo con un sujeto de nombre Gabriel Elías Barrios López (Barrios con la letra s final), lo que resulta ser una coincidencia relevante y un indicio más para acreditar la verdadera identidad de “Francisca Leyton”.

Otro antecedente que permitió asentar la presencia de la acusada en los hechos se obtuvo a partir de la declaración que **Walter Toy** tomó en septiembre de 2016 en la SIP de Temuco, al comprador del vehículo de Felipe Valderrama, **Elvis Montecinos Verdugo**. Este sujeto declaró al policía que supo de la venta del KIA Sportage, PPU CHCK-63, a través de un conocido suyo llamado Marcelo Flores, quien lo contactó el 23 de abril de 2016 y le comentó que una amiga vendía el auto en 5 millones. Agregó que, el mismo sujeto le llevó el vehículo a su lugar de trabajo para que lo viera y se interesó en comprarlo, acordando que en los papeles señalarían como precio de venta el de 3 millones y medio para no pagar tantos impuestos. Además, señaló que Flores lo contactó con la dueña del auto que se llamaba Isamar, con quien se reunió en la notaría, la que llegó acompañada de María del Pilar. Recordó que ambas mujeres fueron muy convincentes y se presentaron como madre e hija, señalando Isamar que debía vender el auto para viajar a Europa ya que pronto iba a nacer su bebé y este apuro justificaba un precio de venta menor al de mercado, el que el definitiva pagó en efectivo a Isamar. Expuso también que él veía constantemente por las calles de Temuco a Isamar junto a María del Pilar y que Isamar frecuentaba la población donde vivía su mamá.

Este último dato respecto a la presencia de Isamar en la ciudad de Temuco fue avalado por la información obtenida por **Walter Toy**, quien explicó que en la base de datos utilizada por la policía registraba domicilio en la comuna de Arauco, es decir, en la misma región, y en ninguna otra zona de Chile. De otra parte, la persona que realmente se llamada Francisca Leyton, registraba domicilio en Santiago.

También aseveró Montecinos a Walter Toy que, en una ocasión, cuando ya había comprado el vehículo, se le acercó un tipo apodado “El Chori” que trabajaba en una línea de colectivos, el que le dijo que ubicaba el auto que se había comprado porque había sido de Isamar y que tenía un cortacorriente en la parte trasera, y efectivamente lo tenía.

Sobre este último punto contó **Walter Toy**, que, con la información aportada por Elvis Montecinos, y a través de diligencias que explicó, logró ubicar e

identificar a El Chori, llamado Víctor Barrera Castillo, domiciliado en Temuco, el que tenía las mismas características físicas del sujeto al que Celia Canelo observó en el estacionamiento junto a Isamar y María del Pilar. Añadiendo **Toy** que posteriormente se efectuó un reconocimiento fotográfico en el que Celia Canelo identificó a Víctor Barrera Castillo (en el set preparado N° 2 y en la imagen 2) como el hombre que decía ser mecánico y que acompañó a “Francisca Leyton” en el momento de retirar su vehículo desde el estacionamiento.

Asimismo, declaró a **Toy** que Elvis Montecinos le contó que, al mes de haber hecho la compra del auto, se encontraba en la casa de sus padres en Temuco y fue requerido por carabineros, quienes le dijeron que el auto mantenía encargo por estafa en San Fernando y que debía ponerlo a disposición de la fiscalía de Temuco, lo que hizo, y que al tiempo después lo ubicó el dueño del auto de nombre Felipe, resultando ambos estafados.

Finalmente, importante es destacar que la copartícipe, María del Pilar Acevedo Vásquez, quien ya fue condenada por estos hechos, como los sostuvieron fiscal y defensor, reconoció a **Walter Toy** haber estado en las notarías de San Fernando aquel día en compañía de Isamar, sin perjuicio de toda la inventiva que expuso y que fue de plano desechada por el tribunal por inverosímil, como ya se analizó.

Así las cosas, uno a uno fue apareciendo cada antecedente, primero recopilados por los mismos afectados y luego con la colaboración de Walter Toy Peralta, los que se fueron vinculando y entrelazando, y permitieron en conjunto arribar a una inequívoca conclusión, esta es, que la mujer que decía llamarse Francisca Leyton era en realidad Isamar Lermenda Rocha.

Cuestionó en este punto la defensa que las víctimas no eran investigadores y que dicho trabajo debía hacerlo la policía, pero lo cierto es que las gestiones que hicieron los afectados y los antecedentes que recopilaron fueron entregados desde el primer momento a la policía, como lo sostuvo **Cristian Guajardo**, quien recibió la denuncia de Felipe Valderrama y **Walter Toy**, sin que se pueda criticar la proactividad de dos personas que habían sido perjudicadas en elevadas sumas de dinero, y que, como señalaron pusieron en venta los vehículos por estar pasando apuros económicos, lo que justificó su pronto actuar, el que por lo demás resultó fructífero ya que pudieron ubicar y recuperar sus automóviles.

En conclusión, el tribunal contó con un cúmulo de indicios que se tradujeron en una clara y sólida presunción judicial en cuanto a que la mujer que decía llamarse Francisca Leyton era en realidad Isamar Lermenda Rocha.

DÉCIMO: DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL.

La relación de pruebas aportadas y hechos que se fueron asentando podemos ahora encuadrarlos en los requisitos o elementos que se enunciaron tiene el delito de estafa en los dos casos propuestos en la acusación.

Así, en cuanto al **engaño**, ha quedado explicado cómo es que la acusada fue pieza clave para la ejecución del delito, actuando en conjunto con otros individuos, la mencionada María Acevedo y el sujeto al que se menciona hablando por teléfono y/o el que acompañó a la encartada a ver los vehículos y en la operación en las notarías, que pudo ser el mismo según el policía Walter Toy, en base al reconocimiento que le hizo en la investigación Celia Canelo y lo informado por quien compró su auto, Elvis Montecinos, que le permitió identificar al sujeto y obtener su fotografía oficial para ese reconocimiento. A ello se suma la persona que intervino en el depósito de los cheques. Este grupo de personas, actuando con una evidente coordinación y distribución de funciones, contactó a los afectados, que ofrecían a la venta sus autos y, mediante una serie de actos tendientes a engañarlas, la clásica puesta en escena característica de este delito, llevaron a que creyeran que iban a realmente vender sus vehículos a cambio del precio pactado. En esa línea está la primera conversación por teléfono con el supuesto padre de la acusada, la intervención de ella fingiendo ser quien no era y contándoles una historia que hacía plausible su interés en la compra y su disposición a pagar el precio, así como para justificar la intervención de la otra mujer -la acusada no podía comprobar ante notario su real identidad- y en definitiva cómo es que, mientras estaban los interesados en notaría, supuestamente se les había hecho el pago transfiriendo el precio acordado a sus cuentas bancarias. Para hacerlo, a su vez, se valieron del uso de cheques falsos, que no habían sido emitidos por su titular y no tenían fondos, ya que habían sido sustraídos hace tiempo y la cuenta corriente de la titular estaba cerrada, los que depositaron a nombre de los vendedores y por los montos aludidos, a sabiendas que no serían pagados, pero aprovechando un vacío del sistema bancario que implicaba que había un desfase entre que se deposita un cheque falso y en que se detecta y se informa al titular de la cuenta donde se depositaron, figurando mientras tanto un saldo contable que sirvió para consumar el engaño. De este modo, sin perjuicio de todos los engaños y

mentiras periféricas de la puesta en escena, el engaño central estuvo dado por la afirmación de la acusada a cada una de las víctimas en cuanto a que se había pagado el precio mediante el abono del dinero en sus cuentas, cumpliendo la promesa realizada para concertar el negocio, en circunstancias que ello no era real. ¿Pueden atribuirse a Isamar Lermenda acciones no ejecutadas por ella misma sino por las otras personas aludidas? Por supuesto, porque quedó inequívocamente demostrado el concierto entre todos, tal como se desprendió de los relatos de los testigos y se apoyó con las imágenes de las cámaras de vigilancia exhibidas y los documentos aportados. En particular, el depósito efectuado mediante los cheques falsos en las cuentas de los compradores fue algo que ella había prometido a las víctimas, anunciando que su padre haría las respectivas transferencias, en lo que claramente contó con la intervención de otra persona que efectuó ese depósito, y, como Valderrama y Canelo indicaron, además de advertir a través de sus celulares que en sus cuentas se había efectuado un depósito y tenían el saldo contable, afirmaron que recibieron mensajes del supuesto padre confirmando el pago. La presencia de la acusada y sus acompañantes contribuía, a su vez, a dar verosimilitud a sus dichos. Por todo ello, se apreció que Isamar Lermenda en todo momento actuó frente a las víctimas apoyada en la intervención y labores desplegadas por sus copartícipes, y valiéndose de ellos.

Acreditado de esa forma el engaño se verificó inmediatamente el segundo elemento del tipo penal, cual es el **error**, ya que, como es también característico de este delito, las maniobras de los autores fueron determinantes en que las víctimas, en primer lugar, creyeran que la imputada estaba realmente interesada en comprar sus vehículos y pagarles el precio, aceptando lo expuesto por ella en cuanto a que su padre les haría la transferencia, lo que las llevó a acudir esa jornada a la notaría para concretar el acuerdo; y, fundamentalmente, que una vez allí, y conforme a lo que les dijo la imputada, conteste con la información de su cuenta bancaria y la comunicación en el mismo sentido del supuesto padre, creyeran también que el pago se había realizado, de tal modo que esa falsa percepción de la realidad, en que consiste el error, fue determinada por el engaño.

El tercer requisito de la estafa, como anunciamos, es la **disposición patrimonial**, y se acreditó también, ya que fue establecido que tanto Felipe Valderrama como Celia Canelo realizaron actos que implicaban traspasar sus vehículos, provocando la disminución en su patrimonio que conlleva este elemento, la que por cierto no esperaban fuera gratuita, sino a cambio de la

contraprestación acordada. Esa disposición no fue en este caso un contrato de compraventa, como a ambos se les había hecho creer por los estafadores, sino la suscripción de un poder o mandato a María Acevedo para que ella vendiera a su vez los móviles, como se apreció en los respectivos documentos aportados, no obstante lo cual esos contratos estaban igualmente destinados a la transferencia del dominio a terceros, lo que se verificó en el caso del vehículo de Valderrama, no así en el de Canelo, lo que no impidió tener por verificado este requisito, atendiendo al sentido natural y obvio, con consecuencias jurídicas, de esa operación. Asimismo, paralelo a ese acto de disposición de las víctimas, ambas efectuaron la entrega material de los móviles, que vino a confirmarla.

Respecto del cuarto elemento, el **perjuicio**, se tuvo en cuenta que el acuerdo alcanzado por las partes, en cada caso, implicaba transferir los vehículos de las víctimas a cambio de recibir el precio pactado, equivalente a \$7.400.000 en el caso de Valderrama y de \$7.000.000 en el caso de Canelo, expectativa legítima de un acuerdo de esa naturaleza y que no se vio satisfecha debido al engaño fraguado y consumado a través de cheques falsos. Para el tribunal, independiente del traspaso de los vehículos, tasados convencionalmente en esas cantidades, y de cómo fueron recuperados después, con las particularidades manifestadas por los afectados, el perjuicio estuvo en que las víctimas se desprendieron de sus vehículos bajo la expectativa de recibir el precio acordado, el que no se les pagó por efecto del engaño.

Por último, entre el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio se apreció, inequívocamente, una **relación de causalidad** necesaria, en el sentido que cada uno de esos elementos está ligado, siendo uno causa y el otro efecto del anterior, como una cadena, de suerte que no se explica uno sin su relación con los otros. El engaño fue lo que determinó el error, este llevó a la disposición patrimonial y así se generó el perjuicio, sin que se aprecie, en las dinámicas que afectaron a ambas víctimas, otra circunstancia que se eleve a la categoría de concausa. Por tanto, el perjuicio de las víctimas puede ser atribuido al engaño generado por la acusada y sus copartícipes.

Con el análisis efectuado, se comprobaron cada uno de los requisitos del delito y la participación como coautora de la acusada, en ambos episodios recogidos en la acusación.

UNDÉCIMO: HECHOS ACREDITADOS Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.

Con el mérito de la prueba aportada por el Ministerio Público, a la que se hizo

mención y se valoró, apreciada en su conjunto y libremente por este Tribunal de Juicio Oral, sin contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, pudo tenerse por suficientemente establecida, más allá de toda duda razonable, la siguiente relación de hechos:

Hecho 1. *En abril de 2016, la víctima Felipe Alejandro Valderrama González, publicó en la página virtual Chileautos.cl la venta de su Station Wagon marca KIA Motors, modelo Sportage Pro II, 4x4, placa patente CHCK-63. El 18 de abril del mismo año, fue contactado telefónicamente por un sujeto que se identificó como Walterio Leyton, quien manifestó su deseo de comprar el vehículo para su hija, señalando no poder concurrir a la ciudad de San Fernando, lugar donde se ofertaba el móvil, pero que lo haría su hija en compañía de un mecánico. Luego el 19 de abril, alrededor de las 15.00 horas, la víctima se reunió en el sector céntrico de San Fernando con la acusada, quien señaló llamarse Francisca Leyton y ser hija de Walterio Leyton, la que era acompañada por un sujeto varón, supuesto mecánico. Tras revisar el vehículo, la acusada manifestó satisfacción con éste y que le pediría a su padre que procediera a comprarlo. Ese mismo día, en horas de la noche, la víctima recibió un llamado telefónico del supuesto padre de la acusada, quien señaló que su hija concurriría a San Fernando a concretar la compra del móvil. Fue así como el 20 de abril de 2016, alrededor del mediodía, la víctima se reunió con la acusada en una notaría de San Fernando. En esta oportunidad, la acusada se hacía acompañar del mismo sujeto del día anterior y de una mujer de nombre María del Pilar Acevedo Vásquez, a quien presentó como su tía. En ese acto se concretó la venta del vehículo, para lo cual la víctima le otorgó un poder especial, para que en su nombre pudiera transferir el vehículo a un tercero. El precio de la compraventa fue de \$7.400.000.-, el cual la acusada simuló pagar mediante depósito del cheque Serie AY 5876221, de la cuenta corriente N° 62900073106 del Banco Estado de Chile, en la cuenta del afectado N° 41441044, del BCI; depósito que en el mismo acto habría efectuado a distancia el supuesto padre de la acusada. La víctima revisó su cuenta bancaria por internet y al verificar que figuraba un saldo contable por el valor de la compraventa, hizo entrega material del vehículo a la acusada y sus acompañantes, quienes se lo llevaron de inmediato. Sin embargo, al día siguiente, el banco no liberó los fondos y procedió a protestar el cheque depositado por el supuesto padre de la acusada, toda vez que éste no tenía fondos, la cuenta corriente respectiva, se encontraba cerrada desde el año 2013 y además la firma era visiblemente disconforme”.*

Hecho 2. *En abril de 2016, Héctor Hugo Orellana Vergara, publicó en la página virtual Chileautos.cl la venta de su automóvil, marca Peugeot, modelo 207. El 18 de abril del mismo año, fue contactado telefónicamente por un sujeto que se identificó como*

Walterio Leyton, quien manifestó su interés en la compra del vehículo, acordando concurrir al día siguiente en horas de la mañana, a la ciudad de San Fernando, lugar donde se ofertaba el móvil, para examinar el vehículo. Esta persona no concurrió a la hora señalada, pero en horas de la tarde del mismo día 19 de abril, la víctima recibió un llamado telefónico por parte de la acusada, quien se presentó como Francisca Leyton e hija de Walterio Leyton, manifestando su deseo de ver el automóvil en ese momento. Héctor Orellana le pidió a su pareja Celia Beatriz Canelo Miranda mostrar el móvil a la acusada, reuniéndose ambas en el lugar de trabajo de la primera. En esa ocasión, la víctima Celia Canelo Miranda, le manifestó a la acusada que ella tenía también a la venta su vehículo marca Chevrolet, Modelo Trailblazer II, placa patente BSDR-31, entusiasmándose la acusada con la descripción de este vehículo, pidiendo que le fuera exhibido, lo cual se concretó momentos más tarde. El mismo día 19 de abril, en horas de la noche, el supuesto Walterio Leyton llamó telefónicamente a Héctor Orellana, señalando que a su supuesta hija Francisca -la acusada- le había agradado mucho el segundo móvil y que contaban con el dinero para comprarlo, acordando como precio la suma de \$7.000.000.-

Fue así como el 20 de abril de 2016, alrededor de las 15.30 horas, la víctima se reunió con la acusada en una notaría de San Fernando. En esta oportunidad, la acusada se hacía acompañar de un sujeto varón y de una mujer de nombre María del Pilar Acevedo Vásquez, a quien presentó como su tía. El precio de la compraventa se simuló pagar mediante depósito del cheque serie AY 5876225 de la cuenta corriente 62900073106 del Banco Estado de Chile, en la cuenta corriente de la víctima N° 70180547 del Banco BCI, depósito que en el mismo acto habría efectuado el supuesto padre de la acusada. La víctima revisó su cuenta bancaria por internet y al verificar que figuraba un saldo contable por el valor acordado concretó la compraventa del vehículo, para lo cual otorgó un poder especial a la supuesta tía María Acevedo Vásquez -a petición de la acusada, quien señaló estar cursando estudios superiores con sistema de beca, por lo que no podía figurar con vehículos a su nombre- para que en su nombre pudiera transferir el vehículo a un tercero, haciendo entrega material del vehículo a la acusada y sus acompañantes, quienes se lo llevaron de inmediato. Sin embargo, al día siguiente, el banco no liberó los fondos y procedió a protestar el cheque depositado por el supuesto padre de la acusada, toda vez que la cuenta no tenía fondos, se encontraba cerrada desde al año 2013 y la firma era visiblemente disconforme.

Los dos hechos señalados precedentemente, congruentes con la acusación, permitieron configurar, **dos delitos de ESTAFA previsto en el artículo 468 del Código Penal**, por cuanto, como se ha razonado, se verificaron cada uno de sus elementos, es decir, un engaño ejecutado por la acusada Lermenda Rocha en

conjunto con otros individuos, que provocó un error en las víctimas Felipe Valderrama González y Celia Canelo Miranda, llevándolas a efectuar una disposición patrimonial en su favor, lo que les ocasionó un perjuicio; todo ello debidamente concatenado en una relación causal.

Se encuadraron los delitos en el numeral **1 del artículo 467 del Código Penal**, al considerar que el perjuicio patrimonial en desmedro de Valderrama González alcanzó a **\$7.400.000.-** y el de Canelo Miranda a la suma de **\$7.000.000.-**, cantidades que considerando el valor de la unidad monetaria en el mes de abril de 2016 de **\$45.316** -época en la que se concreta la entrega del vehículo, arroja que los montos de cada una de las defraudaciones **exceden las 40 UTM**.

Ambos ilícitos referidos alcanzaron el **grado de desarrollo consumado**, puesto que las conductas descritas en la ley para constituirlo se verificaron plenamente.

Del mismo modo, se estableció que en tal hecho punible correspondió inequívocamente y más allá de toda duda razonable a la encausada una intervención en calidad de **coautora material inmediata y directa**, en la hipótesis prevista en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

DUODÉCIMO: OTRAS ARGUMENTACIONES DE LA DEFENSA QUE FUERON DESESTIMADAS.

Indicó el defensor que el error en el que incurrieron ambas víctimas no fue inevitable ni forzado, por lo tanto, y entendiendo que se trababan de un encargado de logística y una laboratorista dental, perfectamente pudieron haber salido de él con una actividad mínima.

Este argumento fue derechamente desestimado por el tribunal ya que siquiera la institución bancaria tuvo los medios para evitar el fraude al momento de recibir dos cheques con firmas visiblemente disconformes e incluso con faltas groseras de ortografía, pese a que su principal trabajo es resguardar los intereses económicos de sus clientes, sin que pudiera exigírseles otra conducta a los afectados, quienes revisaron la información entregada por el propio banco y en base a aquella es que procedieron a la firma de los contratos, además, de buena fe, confiando en la acusada y sus copartícipes, quienes propiciaron el engaño por distintos medios, como ya se analizó.

Se planteó también que se afectaría el principio de congruencia ya que no se señala en la acusación que su representada haya planificado los hechos o haya habido concierto previo entre ella y los otros dos sujetos.

El tribunal no compartió tal argumento, toda vez que de la sola lectura de la completa y detallada acusación respecto de ambos hechos imputados se desprende claramente cuales fueron las acciones atribuidas a la encartada, hechos que pudieron acreditarse a cabalidad con la prueba de la cual la defensa tuvo conocimiento. Además, el defensor solo se limitó a señalar la afectación al aludido principio, sin dotar de contenido, fundamentar ni enunciar de qué manera en concreto se habría afectado o limitado el derecho a defensa.

Igualmente sostuvo el letrado que el reconocimiento fotográfico del que dio cuenta el funcionario de la SIP Walter Toy, en el que las víctimas reconocieron a la acusada, no sería una diligencia idónea para vincularla a Francisca Leyton, ya que se habrían usado las fotografías que las propias víctimas proporcionaron para preparar los sets fotográficos. Asimismo, planteó que no se habría realizado el reconocimiento con los estándares exigidos.

Esta alegación tampoco encontró asidero en el tribunal, ya que Walter Toy explicó en detalle cómo fue que se llevó a cabo la diligencia y la preparación de los 2 set de 10 fotografías cada una, cumpliendo los requisitos. Además, sostuvo que efectivamente las víctimas le proporcionaron todos los antecedentes que ellos mismos recopilaron y, entre ellos, una foto del perfil de la acusada sacado de Facebook, sin embargo, aseveró que los sets los preparó con una imagen obtenida del Registro Civil. Y en todo caso, los reconocimientos fotográficos tuvieron un exiguo y residual valor probatorio para dar por asentada la participación de la acusada, como se analizó en detalle en los considerandos previos, al punto que no fue necesario considerarlos para fundar la sentencia, prescindiendo de ellos.

Finalmente, alegó el defensor que no se efectuó la pericia morfológica a la que hizo alusión Walter Toy para comparar las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad con la acusada y demás involucrados.

En este punto el tribunal estimó irrelevante la ausencia de tal pericia porque hubo indicios abundantes que llevaron a establecer la presencia de la acusada junto a las víctimas y a María Acevedo, tanto en las notarías como en el estacionamiento, y que fueron en detalle mencionados precedentemente, entre ellos, la coincidencia entre las características físicas de los involucrados y las observadas en las imágenes, como por ejemplo, que se trataba de una mujer joven, embarazada, en compañía de una mujer de lentes, de entre 50 a 55 años, lo que se pudo corroborar con la exhibición de las imágenes. Además, la indubitada presencia de María

Acevedo firmando en la notaría en los días, horas y circunstancias señalados por los afectados.

Respecto del resto de las alegaciones de la defensa, el tribunal ya se hizo cargo latamente y en detalle en los considerandos previos.

DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DE LA PRUEBA APORTADA RESPECTO DEL DELITO DE USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO MERCANTIL PRIVADO FALSO Y MOTIVOS DE LA DECISIÓN ABSOLUTORIA.

Respecto de este segundo capítulo de la acusación, que, como se expresó en el veredicto, se decidió absolver a la acusada de los cargos formulados en su contra como autora de dos delitos de **uso malicioso de instrumento mercantil privado falso**, toda vez que la prueba del Ministerio Público fue insuficiente para acreditar la totalidad de los elementos del tipo penal, en lo concreto, el perjuicio.

Según la acusación antes citada, se imputó a Isamar Lermenda Rocha haber usado dos cheques falsificados, pertenecientes a una tercera persona, para, a través del engaño, perjudicar patrimonialmente a dos víctimas, propietarias de vehículos.

Luego, el tribunal tuvo en consideración las normas que contemplan el ilícito imputado, en primer término, el 198 del Código Penal, que establece: “El *que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere el artículo anterior, será castigado como si fuera autor de la falsedad*”. Por su parte, el artículo 197, en su inciso primero, sanciona a quien “...*con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el art. 193*”. A su vez, en su inciso segundo prescribe: “*Si tales falsedades se hubieren cometido en letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables...*”, con las penas más graves allí descritas.

Enseguida, considerando el tenor de las normas citadas y la jurisprudencia mayoritaria y sostenida, se tuvo presente que para que se castigue a quien hace uso malicioso de un instrumento privado mercantil falso son necesarios los siguientes requisitos: 1) que el autor realice una conducta que implique usar un documento, uso definido por obtener del mismo la utilidad o finalidad para la que existe; y que ese documento sea mercantil, en este caso un cheque, que tiene ese carácter conforme al artículo 3 N°10 del Código de Comercio; 2) que ese instrumento sea falsificado, en razón de haberse cometido en él alguna de las adulteraciones o falsedades señaladas en el artículo 193 del mismo código punitivo, en este caso, la prevista en su número 1: “*Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica*”, puesto

que, según la imputación, los documentos que fueron depositados presentaban la firma visiblemente disconforme con la de la persona titular de la cuenta corriente que aparecía emitiéndolos, sin perjuicio que las menciones de los cheques relativas al beneficiario, fecha y monto a pagar tampoco habrían sido realizadas por esa persona; 3) que el autor actúe *maliciosamente*, expresión que el legislador utilizó para resaltar que se requiere un dolo directo; y 4) que se produzca un perjuicio, entendido como un detrimento patrimonial de una persona -natural o jurídica- que debe corresponder en este caso a la titular de la cuenta corriente respecto del dinero disponible en aquella, no debiéndose confundir con los perjudicados de la estafa en este caso.

A continuación, haremos el análisis de la prueba en relación con ambos hechos imputados, los que, si bien afectaron a dos personas que ninguna vinculación tenían entre ellas, el modus operandi fue el mismo.

Respecto del primer elemento que se enunció, cual es la *conducta de usar un documento privado mercantil*, en este caso dos cheques, se contó con los relatos de las víctimas del hecho 1 y 2, **Felipe Alejandro Valderrama González** y **Celia Beatriz Canelo Miranda**, respectivamente, quienes contaron en detalle el ardid del que fueron objeto por parte de la acusada, quien fingió llamarse Francisca Leyton y los contactó en el mes de abril de 2016 para comprarles sus vehículos que habían puesto a la venta a través de su publicación en la página web Chileautos, manifestándoles su interés, concertando visitas en compañía de otra mujer, de nombre María del Pilar Acevedo Vásquez, y un tercer sujeto no identificado, que sería mecánico. Fue así como acordaron con los vendedores el pago del precio, que realizaría según ella quien sería su padre, cuyo nombre también fue fingido y correspondía a Walterio Leyton, con quien las víctimas solo tuvieron contacto telefónico; y la forma de pago, que sería en efectivo o mediante transferencia bancaria. Para concretar la venta se reunieron la acusada y sus acompañantes con cada una de las víctimas, el día 20 de abril de 2016, en diferentes horarios y notarías de San Fernando, y ella les hizo creer que se había realizado el pago, ya que fueron depositados los dos cheques en las cuentas de las víctimas, y aparecían las sumas de dinero acordadas en sus cuentas bancarias como “saldo contable”, por lo que éstas procedieron a la firma de un contrato, a través del cual daban poder amplio a la coautora María Acevedo para que en nombre de ambas víctimas dispusiera de los vehículos. También entregaron materialmente los vehículos y la

imputada y sus acompañantes se los llevaron. Posteriormente se percataron que el dinero en realidad nunca fue depositado o transferido a sus cuentas.

Las versiones de los afectados se vieron refrendadas por los testimonios de los funcionarios policiales **Cristian Marambio Guajardo** y **Walter Toy Peralda**, y por la pareja de Celia Canelo, **Héctor Hugo Orellana Vergara**, quienes ratificaron en lo sustancial y relevante las versiones de ambas víctimas, las que además se vieron avaladas por la incorporación de los **dos cheques** que fueron utilizados y de los **documentos firmados en la notaría**, todo lo que ya se ha analizado a propósito del delito de estafa en el apartado anterior, y a lo que nos remitimos por economía.

En cuanto a la efectividad de que haya sido la acusada quien usó los cheques, ello fue cuestionado por la defensa, señalando que no se podía determinar qué persona hizo el depósito y que en todo caso no había sido su defendida, pues ella se encontraba en ese momento junto a las víctimas en las notarías. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con la argumentación de la defensa, toda vez que, a partir de las declaraciones de las víctimas, las que se ponderaron como altamente creíbles, al ser coincidentes entre sí en cuanto a la manera de proceder de la acusada y María Acevedo -ya condenada por estos hechos, como lo sostuvo la fiscal y lo ratificó la defensa- y respaldadas con la prueba documental, pudo atribuirse a la acusada la conducta de uso del cheque en concierto con María Acevedo y un tercer sujeto. Se alcanzó esta conclusión ya que mientras estaban en la notaría para efectuar la venta de los vehículos, la acusada les señala a ambas víctimas que ya se había efectuado el pago, lo que fue confirmado a aquellas por WhatsApp por quien aparentaba ser el padre de la imputada y luego coetáneamente cada uno de los afectados confirma a través de las aplicaciones del banco que aparentemente se había hecho el pago, lo que fue corroborado a través de la incorporación de las **cartolas bancarias**, destacando que en ningún momento la acusada o los terceros involucrados hacen mención de que el pago se haría con cheque, siendo categóricas las víctimas en señalar que el acuerdo siempre fue el pago en dinero efectivo o transferencia. Lamentablemente para ellas, la aplicación del banco no les brindaba información detallada sobre el modo en que se había hecho el abono en su cuenta. De lo anterior, se infiere inequívocamente que Isamar Lermenda Rocha, en concierto con los otros sujetos y específicamente con aquel que coetáneamente realizó el depósito, es tan responsable de ese depósito como sus compañeros de delito, y ese depósito constituye el uso de los dos cheques, el que tenía por finalidad conseguir la entrega

de los vehículos. En ese contexto, es irrelevante quién haya hecho materialmente los depósitos en el banco y asimismo que no se lo haya podido individualizar.

En cuanto al segundo requisito, consistente en *que tales instrumentos privados mercantiles hayan sido falsificados*, el persecutor planteó que lo eran porque presentaban la firma visiblemente disconforme. Al respecto, se aportaron como prueba los aludidos **cheques** que se depositaron en las cuentas de los dos afectados y que fueron recibidos en la sucursal del Banco Estado de esta comuna, pertenecientes a la cuenta corriente serie AY 5876221 del mismo banco, de la sucursal Claro Solar 931, de Temuco, y que fueron protestados por firma visiblemente disconforme, como lo pudimos apreciar en la **exhibición de las fotografías de ambos documentos** y las respectivas **actas de protesto**. En ambos documentos figuran firmas disímiles entre sí y se aprecia que fueron extendidos por los mismos montos acordados con cada una de las víctimas y a nombre de éstas, advirtiéndose que los números de cuentas de cada una de ellas fueron anotados en el reverso de los cheques. En esta línea se contó, además, con el relato del funcionario de la SIP **Walter Toy Peralta**, quien expuso en detalle las diligencias que desarrolló en este caso y en lo específico que ubicó y se entrevistó con la titular de la cuenta corriente, de nombre María Lucia Brito Salgado, en septiembre de 2016, quien reconoció que los aludidos cheques eran de su propiedad y correspondían a la cuenta de la que fue titular, la que dijo había cerrado el 5 de abril de 2013,

Dicha información fue coincidente con el timbre estampado en ambos cheques, y que pudimos observar, en cuanto a tratarse de una cuenta corriente cerrada.

Según Toy, la señora Brito añadió que un tiempo antes del cierre habían entrado a robar a su casa y, sin que se diera cuenta en ese momento, le sustrajeron un talonario de cheques. Quedó claro, por ende, que los cheques aludidos no fueron emitidos ni firmados por ella.

De modo tal, resultó certeramente establecido a través de los antecedentes referidos y no desvirtuados por otros medios de prueba, que los dos cheques indicados, en cuanto instrumentos que dan cuenta de la orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente, eran falsos, ante todo porque esa persona no los emitió y el banco librado rechazó el pago al ser presentados para ello, en este caso a través de depósito, porque las firmas del girador no fueron emitidas por la titular de la cuenta, habiéndose fingido la suya, sin perjuicio que, en realidad, ninguna de

sus menciones fue realizada por ella, y, en general, la emisión de los documentos no obedecía a una operación y un pago de ella.

En cuanto al tercero, relativo a *que el autor actúe maliciosamente*, en el sentido que tenga pleno conocimiento de que estaba usando, en cada caso, cheques falsos, y lo hiciera con intención, lo que se traduce como dolo directo, se contó con la información ya referida, en cuanto a que ambos documentos pertenecían a la cuenta corriente de otra persona, en nada vinculada con la acusada o alguno de sus copartícipes, ni mencionada o involucrada en alguna de las compras de vehículos, obteniéndose y usándose los cheques sin su conocimiento ni consentimiento, y cuya firma fue falsificada. Esos elementos articularon una sólida presunción en contra de la encartada, pues ella, concertada con quien realizó el depósito y usó en definitiva esos cheques para aparentar el pago que pretendían, necesariamente sabía que se estaban usando cheques falsos. Ninguna prueba se brindó que lo desvirtuara o levantara una duda al respecto.

Por último, en cuanto al cuarto requisito del tipo penal, que consiste en *que se produzca un perjuicio*, ya dijimos que debe referirse a la emisora de los cheques o titular de la cuenta corriente, pues, como el cheque es una orden de pago escrita girada contra un banco para que pague a una persona con cargo a los fondos de la emisora -como se desprende del artículo 10 de la Ley del ramo contenida en el DFL 707 de 1982-, lo que está en juego es precisamente el patrimonio de la emisora. Debía probarse, por tanto, que se pagaron los cheques, produciéndose la disminución de sus fondos disponibles en el banco librado. Sin embargo, desde la misma acusación, que no describía este aspecto, apareció claro que los cheques no se pagaron. Paradojalmente, si se hubieren pagado, las víctimas de la estafa habrían recibido lo que esperaban. Por ello no se concretó el perjuicio, al menos para la titular.

En efecto, quedó patente a través de la declaración entregada por esa persona al funcionario **Toy Peralta**, que dicha cuenta se encontraba cerrada hacía tres años antes de la fecha de uso de los cheques, lo que fue corroborado con los timbres estampados sobre ambos cheques, lo que en definitiva no irrogó ninguna merma económica a la cuentacorrentista, sin perjuicio que el uso permitió concretar la estafa, y con ello generar un perjuicio a terceros, como ya se analizó, perjuicio que no es el considerado por el legislador para este ilícito.

En consecuencia, al no configurarse este requisito del tipo penal imputado a la encartada el delito no terminó de acreditarse, debiéndose emitir una decisión

absolutoria.

DÉCIMO TERCERO: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL. No se argumentaron ni acreditaron en el juicio atenuantes ni agravantes.

DÉCIMO CUARTO: DETERMINACIÓN DE LAS PENAS POR EL DELITO DE ESTAFA. Según lo establecido, Isamar Lermenda Rocha ha resultado responsable en calidad de coautora de dos delitos consumados de estafa, debiéndose castigar al culpable, conforme al artículo 467 N°1 del Código Penal, el que contempla para tal efecto, en primer término, la pena de presidio menor en su grado máximo. Como hemos razonado, no le benefician a la encartada atenuantes ni le perjudican agravantes, escenario en que el tribunal puede recorrer libremente dicho rango, apreciando la extensión del mal causado, lo que, en principio, llevaría a situar dicha sanción cerca de su límite inferior, por cada delito. Pero, además de la sumatoria de las penas que ello implicaría, siguiendo el sistema de acumulación matemática del artículo 74 del código punitivo, ha de vislumbrarse la posibilidad de sancionar a la encausada por la reiteración de delitos de una misma especie, con el sistema de la acumulación jurídica previsto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, como la Fiscalía y la Defensa coincidieron en postular, por ser más favorable a la imputada. Ese ejercicio ha de llevar a imponer una pena única para las diversas infracciones, estimándolas como un solo delito, elevando la pena que corresponde al mismo -determinada anteriormente- en uno o dos grados, coincidiendo ambos en que debía situarse en un solo grado superior, y dentro de éste en su mínimo, es decir, en los **5 años y un día de presidio**, cuantía que estos sentenciadores estimaron justa y proporcional al caso concreto.

Por otro lado, el artículo 467 N°1 citado también reserva para este delito la de multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. No existiendo norma que regule, como respecto de la pena corporal, la acumulación de las penas de multa o su disminución, y considerando las menores facultades económicas de la condenada, de las que dio razón el **informe social acompañado por la Defensa, elaborado por la asistente social Bettsy Gómez Muñoz**, fundamentalmente en cuanto a que tiene dos hijos que mantener y su familia se encuentra inserta en un nivel socioeconómico “clase bajo mísero”, a lo que se suma que se mantendrá privada de libertad, como se dirá a continuación; se hará uso de la facultad del artículo 70 del código punitivo y no se elevará la pena individual correspondiente a un delito, como sí se hizo respecto de la pena corporal para llegar a la pena única,

aplicando en definitiva una **multa única de 12 unidades tributarias mensuales**, pagadera en mensualidades de una UTM cada una, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

A dichas sanciones se sumarán las penas accesorias generales del artículo 28 del Código Penal, que resultan imperativas y sobre lo que la Defensa no argumentó en contrario.

Además, se le impondrá a la sentenciada el pago de las costas, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 del referido código y 47 y 48 del Código Procesal Penal, al haber sido condenada.

DÉCIMO QUINTO: FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA CORPORAL. La pena de presidio antes señalada deberá ser satisfecha por la sentenciada **en forma efectiva**, atendido que no cumple los requisitos previstos en la Ley 18.216 como para optar a una pena sustitutiva, principalmente por la extensión definida que lo impide, sin perjuicio de las diversas condenas anteriores no prescritas registradas en su **extracto de filiación y antecedentes** aportado; aspecto que no fue controvertido por la Defensa.

A dicha pena de presidio se le deberá abonar el tiempo que la acusada ha permanecido detenida o sometida a prisión preventiva por esta causa de manera interrumpida, información que deberá ser determinada en sede de ejecución, toda vez que la información que consta el en auto de apertura es insuficiente y contradictoria con la que existe en el sistema SIAG, como se señala en el certificado extendido por la jefa de unidad (s) de este tribunal de 2 de marzo en curso y que motivó pedir certificar al Juzgado de Garantía; certificado que a su vez que emitido con fecha 5 de marzo, por la Jefa de Unidad de Administración de Causas y que adolece de un error evidente en el segundo párrafo, lo que impide el cálculo certero del tiempo de abono.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 14 N°1, 15 N°1, 24, 26, 30, 50, 68, 69, 70, 74, 193, 197, 198 y 467 del Código Penal; 47, 48, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344, 348 y 351 del Código Procesal Penal; Ley sobre Cuentas Bancarias y Cheques; Ley 18.216; y demás normas pertinentes, se declara que:

I.- Se **absuelve** a **Isamar Del Carmen Lermenda Rocha** de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público, que le atribuyó la calidad de autora en **dos delitos consumados de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 198 en relación a los

artículos 193 y 197, todos del Código Penal, supuestamente cometidos el 20 de abril de 2016 en la comuna de San Fernando.

II.- Se condena a **Isamar Del Carmen Lermenda Rocha** por su responsabilidad en calidad de **autora de dos delitos consumados de estafa**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 467 N°1 del Código Penal, perpetrados el 20 de abril de 2016 en la comuna de San Fernando, en perjuicio de las víctimas Felipe Alejandro Valderrama González y Celia Canelo Miranda, respectivamente. Como consecuencia de ello se le imponen como penas únicas la **de cinco (5) años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y la de multa de 12 unidades tributarias mensuales**, más las penas accesorias generales de **inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos** y de **inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la referida condena**.

III.- Atendido que Isamar Lermenda no reúne los requisitos señalados en la Ley 18.216 como para optar a una pena sustitutiva, **la referida pena privativa de libertad impuesta deberá cumplirla en forma efectiva**, a la que se descontará el tiempo que haya permanecido detenida y/o sometida a prisión preventiva por esta causa, lo que deberá determinarse en el Juzgado de Ejecución, por las razones que se explican en el considerando décimo quinto, párrafo final.

IV.- La sentenciada pagará la multa impuesta ante el juzgado de ejecución, a su equivalente en moneda nacional de curso legal, al valor que la unidad tributaria tenga a la fecha de pago, y podrá hacerlo mediante doce (12) cuotas mensuales y sucesivas de una UTM cada una. La primera cuota deberá pagarla dentro de los cinco primeros días del mes subsiguiente a aquél en que la presente sentencia quede ejecutoriada, y asimismo las otras en los meses siguientes. El no pago de una cuota hará exigible el saldo total adeudado como si fuera de plazo vencido. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

V.- Se impone a la sentenciada el **pago de las costas de la causa**.

En su oportunidad, ofíciase al Juzgado de Garantía de San Fernando remitiendo esta sentencia con certificado de encontrarse ejecutoriada, para su cumplimiento y ejecución, de conformidad al artículo 468 del Código Procesal Penal.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, inclúyase la presente sentencia en el respectivo informe mensual al Servicio Electoral, una vez

que se encuentre ejecutoriada. Ofíciase a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, conforme lo dispone el AD-297-2019 de la Excma. Corte Suprema.

Regístrese.

Sentencia redactada por la jueza Marisol López Machuca.

RIT 133-2018.

RUC 1.600.385.756-9.

Sentencia pronunciada por los Jueces Titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, **Felipe Cortés Ibacache** y **Marisol López Machuca**, y por el magistrado **Rafael Escalante Ortega**, titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, en calidad de subrogante.